

menos que el notario o el registrador sea conocedor, bajo su responsabilidad, de dicho Derecho extranjero (véase artículos 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 36 párrafos segundo y tercero del Reglamento Hipotecario).

3. Ahora bien, cabe otra solución, que es la demanda contra ambos cónyuges, ya que es doctrina reiterada de este Centro Directivo que en el caso de que no se acrediten las normas aplicables del Derecho competente, como ocurre en el caso presente, puede solucionarse el problema dirigiendo la demanda contra ambos cónyuges, único supuesto en el que se podría anotar el embargo sobre la totalidad del bien, no siendo suficiente la mera notificación o comunicación a efectos de tracto sucesivo por desconocerse si con arreglo al Derecho senegalés rige un sistema similar al de gananciales que permitiera la aplicación de lo dispuesto en el artículo 144.1 del Reglamento Hipotecario. La demanda a ambos cónyuges además permitiría que si la anotación concluyera con la venta forzosa de la finca, el funcionario correspondiente podría actuar en representación de ambos titulares en caso de rebeldía (véase Resoluciones esta Dirección General de 9 de agosto de 2006 y 1 de febrero de 2007).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 29 de agosto de 2008.—La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

15069 *RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el recaudador municipal del Ayuntamiento de Jávea, contra la negativa del registrador de la propiedad de Jávea, a la práctica de una anotación de embargo en expediente de apremio por falta de pago de determinados impuestos municipales.*

En el recurso interpuesto por el Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Jávea contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Jávea, don Andrés Colorado Castellary, a la práctica de una anotación de embargo en expediente de apremio por falta de pago de determinados impuestos municipales.

Hechos

I

Se presenta en el registro mandamiento de anotación preventiva de embargo como consecuencia de expediente de apremio ordenándose el embargo de una finca sita en término municipal de Benitachell.

II

El Registrador deniega la práctica de la anotación en méritos de la siguiente nota de calificación: Hechos.—Se presenta mandamiento de embargo del Recaudador del M. I. Ayuntamiento de Jávea, por impago de determinado impuesto o tasas municipales, con providencia de embargo de una finca de la deudora sita en el término municipal de Benitachell.—Fundamentos de Derecho.—No es posible la práctica de la anotación preventiva solicitada por cuanto el Ayuntamiento de Jávea no tiene competencia para realizar actuaciones de recaudación ejecutiva y en consecuencia para trabar embargo directamente sobre bienes situados fuera de su término municipal.—El artículo 8 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales expresamente recoge «que las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relación con los ingresos de derecho público propios de ésta, deberán ser practicados por los órganos competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma o del Estado según los casos, previa solicitud del Presidente de la Corporación». Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del notariado de 9 de marzo, 14 de abril, 22 de diciembre de 2006, 8 de marzo de 2007, entre otras.—Contra la anterior nota de calificación podrá interponerse recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, dentro del término de un mes a contar desde la fecha de su notificación, en la forma y según los trámites previsto en los artículos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria en su nueva redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y Real Decreto 1039/2003, de 1 de agosto, puede también instar la aplicación del cuadro de sustituciones previsto en el artículo 275 bis

de la Ley Hipotecaria, y Resolución de 1 de agosto de 2003 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por el que se aprueba el Cuadro de Sustituciones de los Registradores, con el fin de que el Registrador que corresponda según dicho cuadro pueda calificar y despachar, bajo su responsabilidad, el documento referido.—Jávea, a 25 de abril de 2008.—El Registrador, Andrés Colorado Castellary.

III

El Recaudador anteriormente expresado recurre alegando que el principio de territorialidad alegado por el Registrador se limita a la imposición de gravámenes pero no a actuaciones como la práctica de una anotación preventiva.

IV

El Registrador informó con fecha 22 de mayo de 2008, manteniendo la calificación y elevando el expediente a este Centro Directivo.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 2, 6 y 8.3 del Real Decreto Legislativo de 5 de marzo de 2004 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 99 del Reglamento Hipotecario, así como las Resoluciones de esta Dirección General de 9 de marzo, 14 de abril, 29 de noviembre, 22 de diciembre de 2006 y 24 de enero y 8 de marzo de 2007.

1. Se presenta al Registro mandamiento de embargo del Recaudador Municipal de un Ayuntamiento por impago de determinadas tasas e impuestos municipales con providencia de embargo de inmuebles de un deudor sitos en otro término municipal. El Registrador deniega la anotación por falta de competencia del Ayuntamiento al carecer de jurisdicción para trabar bienes en actuaciones de recaudación ejecutiva situados fuera del territorio de su corporación.

2. El defecto debe ser confirmado. Como ha dicho anteriormente este Centro Directivo (cfr. resoluciones citadas en el «vistos»), el artículo 8 de la Ley Reguladora de las Haciendas locales expresamente recoge que las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relación con los ingresos de derecho público propios de ésta deberán ser practicados por los órganos competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma o del Estado según los casos, previa solicitud del presidente de la Corporación. Aunque la calificación de los documentos administrativos tiene un alcance limitado, sin embargo llega a la competencia del órgano administrativo y en este caso es correcta la actuación del Registrador, aunque las administraciones tributarias del Estado, las comunidades autónomas y entidades locales tengan el deber de colaboración entre sí en los órganos de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.—La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

MINISTERIO DE DEFENSA

15070 *ORDEN DEF/2614/2008, de 10 de septiembre, por la que se concede el primer premio «Fidel Pagés Miravé».*

Mediante la Orden DEF/3339/2007, de 23 de octubre, se procedió a promover la primera convocatoria del premio «Fidel Pagés Miravé», creado por Orden DEF/1760/2007, de 11 de junio, con el fin de incentivar y premiar los trabajos, tanto de investigación como documentales, publicados en la Revista de Medicina Militar.

En dicha Orden se determina que un Jurado, presidido por el Inspector General de Sanidad de la Defensa, propondrá la concesión del premio, premio que se otorgará por Orden de la Ministra de Defensa.

El Jurado, se reunió a tal efecto el 23 de junio de 2008 y ha propuesto, por mayoría de sus miembros, la concesión del premio.

En su virtud, de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 4.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, dispongo:

Apartado único. *Otorgamiento.*—Se otorga el I Premio «Fidel Pagés Miravé» a los siguientes trabajos:

a) Premio «Comandante médico Fidel Pagés Miravé» al trabajo titulado «La asistencia sanitaria militar en Zaragoza desde el siglo XVIII: los hospitales Militares», del que son autores don Luis Alfonso Arcarazo y doña María Pilar Lorén Trasobares.

b) Accésit del Premio «Comandante médico Fidel Pagés Miravé» al trabajo titulado «Características de los parámetros de calidad de Peridostigmia sustancia activa, como indicadores para la toma de decisión en su adquisición logística: Racionalización de costes» del que son autores doña Mercedes Verón Moros, don Juan Ignacio Cabrera Merino, don Alejandro Zamanillo Sainz, don Luis Martín-Albo Montes, doña M.^a Luisa Urquía Grande, don Antonio Juberías Sánchez y don Francisco Javier Broncazo Berenguer.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de septiembre de 2008.—La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

15071 *RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería del mes de julio de 2008.*

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de julio de 2008.

Madrid, 29 de agosto de 2008.—El Interventor General de la Administración del Estado, José Alberto Pérez Pérez.